

ECUADOR

Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Comejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Juan Carlos Ribadeneira

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 18

ECUADOR: S/. 21.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 7.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito, Ecuador.

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico

ECUADOR DEBATE

34

Quito - Ecuador, abril de 1995

EDITORIAL

COYUNTURA

Coyuntura Nacional: El conflicto fronterizo marca la coyuntura económica / 7 - 19

Coyuntura Política: El conflicto territorial Ecuador Perú: Más allá de los nacionalismos / 20 - 29

Conflictividad: El conflicto: octubre 1994 - enero 1995 / 30 - 41

Coyuntura Internacional: El escenario de la "crisis del siglo XXI" en México / 42 - 56

EQUIPO DE COYUNTURA -CAAP-

TEMA CENTRAL

De la violencia urbana a la convivencia ciudadana / 59 - 78

FERNANDO CARRION M.

Crisis económica y violencia social / 79 - 95

MILTON MAYA DIAZ

Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos / 96 - 99

JAVIER PONCE

Seguridad para la gente, o seguridad para el Estado? / 100 - 115

ALVARO CAMACHO GUIZADO

Violencia y sociabilidad: Tendencias de la actual coyuntura urbana en el Brasil / 116 - 129

LUIS ANTONIO MACHADO DA SILVA

La guerra interminable: Fundamentos de la idea de seguridad nacional / 130 - 140

ADRIAN BONILLA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

R224 RW 9838 E3-

DEBATE AGRARIO

Cuestiones distributivas en la economía ecológica / 145 - 164

JOAN MARTINEZ ALIER / JEANNETTE SANCHEZ

La economía política de la gestión ambiental en América Latina / 165 - 181

DAVID KAIMOWITZ

ANALISIS

Modelos, ideologías del desarrollo y culturas políticas: Los casos de Chile y Nicaragua / 185 - 206

ROBERTO SANTANA

Opinión pública y partidos políticos / 207 - 222

FREDY RIVERA VELEZ

CRITICA BIBLIOGRAFICA

Alimentación, género y pobreza en los andes ecuatorianos / 223 - 227

ROCIO VACA BUCHELI

BIBLIOTECA



Editorial

Hemos querido dedicar la presente edición de Ecuador Debate, a un tema que súbitamente ha llamado el interés de nuestras ciencias sociales, quizás porque resulta inocultable en la realidad y porque clama una mejor intelección -al menos-, por parte de la sociedad entera. La importancia en aumento de la violencia en las ciudades latinoamericanas, privilegió siempre una mirada entre asombrada y conservadora, que muchas veces se unía a la más fría de la represión, justificando los excesos de una respuesta violenta a la violencia, que la asumía como una patología ajena e invasora, que nada tenía que ver con nosotros.

En realidad, lo que quieren gran parte de los artículos que hoy presentamos, es hacernos pasar del estupor ante las violencias que sufrimos o ejercemos, y mostrarnos que ellas están vergonzosamente juntas con la falta de predicción, lógica y hasta estética con que hemos dejado crecer nuestras ciudades estrepitosas: este es por ejemplo el intento de Fernando Carrión. O como, la violencia deja de ser un problema coyuntural y se convierte en uno estructural, perversamente adherido a la caída de los salarios, al desempleo, al empobrecimiento veloz, al abandono de lo social por lo privado, cuestión abordada por Milton Maya. Violencias que, observadas por Javier Ponce, se han convertido de tumultos repugnantes, en presas jugosas para los canales de televisión, que con impudicia las exhiben, sin contar que tras el violentador hay un hombre o una Mujer más bien víctimas de las exclusiones sin fin de este mundo; violencias y TV, ejercicio cruel de una pedagogía social que se ufana con reproducir esas mismas exclusiones.

Pero... y qué de las respuestas y ensayos de sofocación de la violencia que se conciben en las políticas de Estado? Alvaro Camacho desentraña los discursos y prácticas antiviolentas ideadas por el Estado colombiano que, hace de la violencia parte del repertorio de políticos y empresarios reclamando mayores garantías ante la agresividad latente de los pobres, mientras ese mismo Estado abdica de su papel de corrector de las inequidades y árbitro de conflictos. Con el trabajo de Luis Antonio Machado, se descubre que la violencia urbana en Brasil, ha logrado niveles imprevistos de sofisticación y eficacia porque disputa al Estado su monopolio en el uso de la violencia, hasta el punto de lograr niveles de organización que compiten con la policía por la hegemonía y el control de grandes áreas del crimen organizado

y el tráfico de drogas. Por último Adrián Bonilla, analiza las diferencias de concepción entre las doctrinas de seguridad nacional que rigen en los países del norte, y Ecuador: diferencias en la percepción del orden mundial, las relaciones entre Estado, paradigma de nación y sociedad, la creación y postulación de valores identificatorios y diferencias en el cómo, éstas doctrinas cierran o abren resquicios para relacionar la idea de seguridad con intereses alternos de las organizaciones de la sociedad civil.

En *Debate Agrario*, Joan Martínez Alier y Jeannette Sánchez nos traen un muy rico análisis de cómo la economía ecológica observa a la economía de mercado: ésta se encuentra inmersa en un sistema físico - químico - biológico, mucho más amplio. Por tanto, surge necesariamente la cuestión del valor de los recursos naturales y los servicios ambientales para la economía, intraducibles a valores monetarios. En la misma sección David Kaimowitz trata lo insostenible del patrón actual de desarrollo en América Latina por estar asociado con el uso y degradación de los recursos naturales renovables y no renovables, más rápido que lo que estos pueden ser producidos o sustituidos.

En nuestra sección de Análisis presentamos un artículo de Roberto Santana en el que interpreta a Chile y Nicaragua, enfrentadas al desafío del desarrollo y más ampliamente al desafío de la modernización del conjunto de sus estructuras socioeconómicas. A este artículo se suma uno de Fredy Rivera quien desentraña los diversos mecanismos comunicativos así como la puesta en escena de múltiples ámbitos discursivos en las campañas electorales, apelando y hasta secuestrando la sensibilidad de la opinión pública.

Cabe relieves en nuestra sección de Coyuntura el tratamiento de lo que ya se está denominando como "la crisis del siglo XXI" inaugurada en México. Destacamos también un pormenorizado análisis de los imaginarios que sobre el territorio y el concepto de nación se han tejido a lo largo de la conflictiva historia de nuestro país en sus relaciones y enfrentamientos armados con el Perú. Inauguramos con este número una nueva sección de Coyuntura que abordará en cada entrega un análisis de la conflictividad social suscitada en el país a lo largo del período.

JUAN CARLOS RIBADENEIRA
EDITOR

La economía política de la gestión ambiental en América Latina

David Kaimowitz (*)

El patrón actual de desarrollo de América Latina es insostenible. Está asociado con el uso y degradación de los recursos naturales renovables y no renovables más rápido que lo que estos pueden ser producidos o sustituidos.

Cada año hay menos bosques, minerales y petróleo, recursos genéticos y suelos fértiles. Hay problemas con la disponibilidad del agua y la vulnerabilidad de los monocultivos agrícolas a las plagas. La industria, agricultura, sistema de transporte y estilo predominante de asentamiento humano contaminan el aire y el agua, lo cual destruye el ambiente y perjudica la salud humana. En el corto plazo eso reduce el bienestar social; a más largo plazo, amenaza con crear una crisis en la acumulación de capital.

Para resolver los problemas de la sobre explotación de los recursos naturales y la contaminación del ambiente se requiere, entre otras cosas, la intervención del Estado. Dicha intervención incluye la definición de un marco legal y macroeconómico y un sistema de impuestos y subsidios que reducen los incentivos privados a sobreexplotar los recursos naturales y contaminar, inversiones en infraestructura, ciencia y educación y la creación de espacios que permiten la resolución de conflictos y diferencias entre los distintos grupos de in-

(*) Especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en San José, Costa Rica. Las opiniones expresadas aquí son del autor, y no necesariamente reflejan la posición del IICA. El documento ha sido enriquecido por discusiones sobre el tema con Eduardo Baumeister, Fabiola Campillo, Manuel Chiriboga, Ricardo Costa, Charlotte Elton, Gonzalo Estefanell, Roberto Haudry, Henri Hocde, Roberto Martínez Noguiera, David Mayhre, Orlando Plaza, Grettel Mc Vane, Lori Ann Thrupp, Eduardo Trigo, y los participantes del seminario sobre "Economía política del desarrollo sustentable en América Central" realizada en la Catalina, Costa Rica, 20 al 23 de junio de 1993.

terés. Es posible avanzar a un manejo más racional de los recursos naturales, pero estos esfuerzos siempre tendrán un alcance limitado mientras el Estado no orienta la gestión de dichos recursos ¹.

Si los que toman las decisiones públicas en América Latina tuvieran la disposición real de buscar vías de desarrollo que causen menos deterioro a los recursos naturales probablemente sería factible encontrarlas. Harían falta grandes cambios en las políticas, instituciones y patrones tecnológicos, pero no es impensable que se puede hacer. Eso, sin embargo, significaría altos costos para ciertos grupos, quienes tendrían que abandonar actividades que contaminan o degradan los recursos naturales, financiar esfuerzos de reconversión productiva para incorporar tecnologías más "limpias", invertir en medidas para reducir la pobreza y aceptar un mayor grado de participación popular en la toma de decisiones ².

El asunto se complica más porque no necesariamente el que protege el ambiente y paga los costos es quien capitaliza los beneficios. En el contexto actual el campesino que no deforesta no percibe ningún beneficio del hecho que

los recursos genéticos del bosque puedan servir en el futuro a la industria farmacéutica. Por lo general, los dueños de las industrias contaminantes no viven en las ciudades o barrios que contaminan. Si una empresa transnacional degrada un área, puede trasladarse a otro lugar, todavía no degradado.

Algunos problemas ambientales, aunque no todos, tienen el inconveniente adicional de demandar grandes inversiones que sólo maduran en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, muchos de los beneficios de invertir en conservación de suelos para prolongar la vida útil de las presas hidroeléctricas no se obtendrán hasta mediados del próximo siglo. Pueden pasar diez o quince años entre, cuando se invierte en educación primaria y cuando se percibe una retribución económica. El impacto de la deforestación actual del Amazonas en el clima mundial sólo se podrá notar después de varias décadas. **Suele ser más barato prevenir los problemas ambientales que superarlos una vez que se presentan (y algunos daños ambientales son irreversibles) pero eso implica una capacidad de previsión y planificación que no siempre existe.**

1. Cuando se refiere al manejo racional de los recursos naturales se entiende un manejo que es racional desde el punto de vista de la sociedad, ya que tanto la sobre explotación de los recursos naturales como la contaminación pueden ser racionales desde el punto de vista individual. (comunicación personal Carlos Rivas).

2. La disminución de la pobreza y la apertura de espacios de democracia, además de ser deseables de por sí, son requisitos esenciales para reducir el deterioro ambiental. Si bien los pobres no son los principales causantes de la destrucción ambiental, si no se toman medidas para disminuir la pobreza será difícil eliminar el avance de la frontera agrícola, la erosión en las laderas, la deforestación para obtener leña, los problemas de saneamiento ambiental o las altas tasas de crecimiento demográfico. Tampoco es realista esperar que el Estado sólo pueda tener la capacidad de velar por el manejo racional del medio ambiente, sin una participación estrecha y comprometida de la población local.

En los últimos años, los economistas en América Latina han comenzado a prestar más atención a temas relacionados con el ambiente. Sin embargo, los estudios que han realizado tienden a tener un enfoque normativo, centrado en analizar los costos y beneficios de distintas alternativas para poder hacer recomendaciones. Se supone que las personas que reciben esa información tomarán las decisiones apropiadas, o por lo menos que si no lo hacen eso es un problema “político”, que rebasa el alcance del análisis “técnico”.

Este ensayo, por el contrario, tiene como preocupación central entender la lógica de la toma de decisiones relacionadas a políticas de gestión ambiental en América Latina, y explicar bajo qué condiciones los que toman esas decisiones pueden estar dispuestos a y ser capaces de actuar en favor de un manejo más racional de los recursos naturales y el ambiente.

Se reconoce de antemano que dentro de la “problemática ambiental” existen una multitud de temas específicos distintos, cada uno de los cuales tiene sus propias características y dinámica de toma de decisiones. Un grupo puede favorecer ciertas políticas de gestión ambiental y oponerse a otras; algunas iniciativas avanzan mientras otras se estancan. No hay un movimiento ambien-

talista, sino múltiples, y probablemente tiene que ser así (comunicación personal Roberto Martínez). Sin embargo, este ensayo busca examinar algunas de las grandes tendencias, con la esperanza de motivar otros estudios posteriores más específicos; más que un estudio terminado, pretender ser una agenda de investigación.

La primera hipótesis de trabajo es que no se tomarán medidas serias encaminadas a reducir la degradación de los recursos naturales si no hay presión para hacerlo. Esta hipótesis se fundamenta en la observación empírica de que ninguna reforma política o social histórica de envergadura en América Latina ha ocurrido sin luchas sociales. Son contados los casos donde los grupos gobernantes mismos han protagonizado reformas a favor de los sectores populares o la protección de los recursos naturales, sin fuertes presiones previas³. El Estado tiene cierto grado de autonomía, pero aún así los que toman las decisiones normalmente están preocupados por la “rentabilidad política” de dichas decisiones. Si nadie presiona a favor de un manejo racional de los recursos naturales puede concluir que eso no resulta políticamente “rentable”.

Partiendo de la hipótesis de que hacen falta presiones sociales para lograr reformas profundas, la siguiente sección

3. Incluso en casos conocidos donde los gobernantes han demostrado una cierta autonomía de las clases dominantes y protagonizado reformas profundas, como el de la reforma agraria y la nacionalización del sector petrolero por Cárdenas en México, las reformas agrarias realizadas por gobiernos militares en Honduras y Perú, la lucha de Torrijos en Panamá por la soberanía de la zona del canal, las reformas peronistas en Argentina y las reformas sociales de Calderón Guardia en Costa Rica, siempre hubo fuertes presiones sociales anteriores a favor de esas reformas.

de este ensayo examina tanto el potencial como las limitaciones de siete actores sociales que podrían ejercer presión a favor de un manejo más racional de los recursos naturales: a) actores extra-regionales (gobiernos y ONG's de los países desarrollados, la banca multilateral y los organismos internacionales), b) capas medias urbanas, c) empresas que ven el tema del ambiente como oportunidad de hacer negocio, d) productores y comunidades afectados por la contaminación, e) movimientos indígenas, f) ambientalistas profesionales, y g) partidos y movimientos sociales preocupados por la justicia social. Las presiones de estos actores responden en parte a sus intereses materiales directos, pero también a cuestiones no directamente vinculados a intereses, sino de tipo más cultural, de clima ideológico o relacionados con la cotidianidad (comunicación personal Roberto Martínez).

La segunda hipótesis del trabajo es que dos de los mayores obstáculos para que el Estado latinoamericano actúe a favor de un manejo racional de los recursos naturales son la dependencia del modelo de acumulación actual en la sobre explotación de los recursos humanos y naturales para competir en la economía mundial y el gran poder que tienen las instituciones financieras internacionales ⁴. Esos

dos fenómenos refuerzan los grupos sociales opuestos a las reformas ambientalistas y sociales.

La tercera hipótesis central es que **para que el Estado tenga la capacidad de intervenir a favor de un manejo racional de los recursos naturales hace falta un aparato institucional bien desarrollado y cierta autonomía relativa de las clases dominantes** (Rueschemey; Evans, 1985)⁵. El diseño de ese aparato tendría que reflejar las necesidades específicas de la gestión ambiental. También necesita tener objetivos de desarrollo más allá de la captación de recursos para el beneficio de sus propios miembros (Bates, 1988; de Janvry; Sadoulet; Thorbecke, 1993). Sin estas condiciones, por más presión que haya, difícilmente el Estado estará en condiciones de implementar las reformas profundas que sean necesarias. El cumplimiento cabal de estas cuatro condiciones resulta problemático en la mayoría de los países de América Latina, sobre todo en el nuevo contexto de una fuerte ideología neoliberal, que plantea una reducción casi generalizada en el papel del Estado. Sin embargo, la magnitud de la brecha en cuanto al nivel de cumplimiento varía. Además, es importante tratar de entender los factores que favorecen u obstaculizan el cumplimiento de estas condiciones.

4. No es casual que la presión de los organismos financieros internacionales aparece tanto como un elemento favorable para la gestión ambiental, como una de las principales limitaciones. Efectivamente esa presión abre ciertos espacios para cambios a la vez que cierra otros.

5. Al mismo tiempo el Estado debería ser relativamente susceptible a las presiones a favor de la gestión ambiental. Esta idea se retoma más adelante.

LA PRESION SOCIAL A FAVOR DE LA GESTION AMBIENTAL

Los actores extra-regionales

El surgimiento de movimientos ambientalistas fuertes en los países desarrollados corresponden al desarrollo de importantes grupos en esos países con suficientes ingresos para poder darse el lujo de preocuparse no sólo con la sobrevivencia cotidiana, sino con la calidad de vida en un sentido más amplio. En América Latina, el tema ambiental entró al escenario por una vía distinta. Sin desconocer la presencia histórica en la región de diversas iniciativas ambientalistas, no parece exagerado afirmar que en gran medida la preocupación por los recursos naturales y el medio ambiental en los últimos años se debe a influencias políticas, económicas e intelectuales de los Estados Unidos y Europa. Estas influencias, a la vez, tienen sus raíces en los movimientos ambientalistas de los países desarrollados recién mencionados, que surgieron en las décadas de los años setenta y ochenta (Buttel, 1992; Sale, 1993).

A partir de la Conferencia sobre el Medio Humano de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, los movimientos ambientalistas del norte comenzaron a presionar a sus gobiernos y a los organismos internacionales financieros y de cooperación técnica para que estos apoyaran políticas menos perjudiciales para el ambiente en América Latina (Bramble y Porter, 1992). También entraron a actuar directamente en la región, abrien-

do oficinas y apoyando proyectos en muchos países.

La presión de los países desarrollados a favor de diversas medidas ambientales en América Latina ha tomado varias formas. Las ONG's ambientalistas han hecho denuncias públicas relacionadas con el comercio de residuos tóxicos y plaguicidas prohibidos y con grupos que están contribuyendo a la deforestación y la extinción de ciertas especies. Las agencias externas han financiado proyectos en manejo forestal, áreas protegidas, calidad de agua y saneamiento ambiental, conservación de suelos y manejo de cuencas y de fortalecimiento de las instituciones con responsabilidades ambientales. Debido a la presión de los grupos ambientalistas, se ha vuelto más difícil conseguir préstamos externos para carreteras y proyectos de colonización y manejo forestal en áreas de trópico húmedo. Por lo menos en un par de ocasiones, como la presión sobre Brasil para reducir la deforestación de la Amazonía y la incorporación del tema ambiental en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, se ha evidenciado una condicionalidad ambiental explícita, donde se exige que los gobiernos latinoamericanos adopten ciertas políticas ambientales para poder acceder a préstamos o a los mercados de los países desarrollados (Hurrell, 1992). También existen un número creciente de restricciones comerciales en los países desarrollados que limitan la importancia de alimentos con residuos de plaguicidas, animales silvestres, maderas tropi-

cales e incluso ciertos tipos de empaques que no son fácilmente degradables.

La gran relevancia que ha tomado el tema ambiental en los medios de comunicación, debates académicos y agrupaciones sociales de los países desarrollados ha tenido una influencia notable sobre las sociedades latinoamericanas, ayudando a generar movimientos ambientalistas nacionales dentro de la región que ejercen presión a favor de la gestión ambiental. Incluso muchos de estos movimientos ambientalistas reciben financiamiento directo de organismos de los países desarrollados.

Por el otro lado, la presión extra-regional parece tener limitaciones marcadas. Al mismo tiempo que las instituciones financieras internacionales aumentan su presencia en temas relacionados con los recursos naturales y el ambiente siguen promoviendo políticas de ajuste estructural, liberalización y reducción de la presencia estatal que probablemente sean incompatibles con un manejo racional de los recursos naturales (Leis, 1992; Reed, 1992). La enorme presión para aumentar las exportaciones en el corto plazo puede llevar a una sobreexplotación de los recursos naturales. La liberalización del comercio internacional implica que los países que invierten en la protección ambiental o imponen restricciones ambientales, y por lo tanto tienen costos más altos, tienen que competir con otros países que no lo hacen. El carácter regresivo de muchas de estas políticas tiende a aumentar los

niveles de pobreza, lo cual genera mayor presión sobre los recursos naturales. Una reducción generalizada del aparato estatal, como ha ocurrido en muchos países, puede disminuir la capacidad de implementar políticas ambientales.

Muchas veces las instituciones financieras internacionales actúan más en respuesta a presiones de parte de los movimientos ambientalistas que por un convencimiento propio, y eso limita la efectividad de los esfuerzos. Todavía son contados los casos de condicionalidad ambiental, y el único actor extra-regional que aboga por reformas políticas y económicas profundas es un grupo minoritario de ONG's.

También es importante distinguir entre presiones externas a favor de la conservación de la naturaleza y las que buscan el "desarrollo sostenible" de los países de América Latina. En el primer caso, la preocupación principal es mantener los recursos naturales de la región para que puedan ser aprovechados por los países desarrollados mismos, mientras en el segundo caso el énfasis es garantizar la base de recursos naturales y el mejoramiento de los niveles de vida para amplios sectores de la población latinoamericana.

Las capas medias urbanas

El movimiento ambientalista en los países desarrollados forma parte de lo que ha llegado a ser denominado los "nuevos movimientos sociales"⁶. La

6. Otros movimientos considerados en esta categoría incluyen los movimientos feministas, estudiantiles y pacifistas (Buttall, 1992).

base social de apoyo de estos movimientos son las capas medias jóvenes, con cierto nivel de educación, quienes se incorporan en estos movimientos no tanto para recibir beneficios materiales directos sino para expresar su descontento con las instituciones estatales y la sociedad moderna actual y el deseo de identidad y espacios de participación (Buttelt, 1992).

En América Latina el fenómeno de los nuevos movimientos sociales también se presenta, sobre todo en las grandes conglomeraciones urbanas como Santiago, Chile, el Distrito Federal de México y Sao Paulo en Brasil, donde han surgido numerosas organizaciones ambientales de corte clase media (Viola, 1992). Además, existe un universo mucho más amplio, de personas de las capas medias, que son sensibles a los mensajes sobre el ambiente transmitidos por los medios de comunicación. Estos grupos sufren grandes problemas de contaminación del aire, agua y alimentos y congestión de vehículos, que sirven como recuerdo constante del problema ambiental. También son sensibles a las noticias sobre catástrofes ambientales como la liberación de radiación nuclear en Chernobyl, inundaciones o sequías que se atribuyen a desajustes ambientales y los derrames de petróleo por barcos naufragos.

La preocupación ambiental de las capas medias se ha centrado en la contaminación urbana y algunos símbolos publicitados de la destrucción de la naturaleza, como la deforestación en las Amazonas, el peligro de extinción de

ciertos animales y árboles y las luchas de los movimientos indígenas. La influencia de estos grupos ha sido lo suficientemente fuerte para lograr que casi todos los partidos políticos de América Latina incorporen el tema ambiental dentro de sus programas. También los gobiernos han tomado medidas concretas, aunque insuficientes, para disminuir los niveles de contaminación del aire en las grandes ciudades.

Al mismo tiempo, la atención de las capas medias urbanas hacia temas ambientales es esporádica y basada más en imágenes que en un buen entendimiento de los problemas y sus causas. La opinión pública que generan, responde de forma emocional a los símbolos ambientales de la cultura popular y los medios de comunicación, pero pocas veces logra convertirse en presión efectiva. Eso dificulta la consolidación de organizaciones estables que pueden mantener la presión en el tiempo. Los procesos de ajuste han tendido a reducir los ingresos de muchos grupos de capas medias, forzándolos a preocuparse más por su propia sobrevivencia económica, y dejando menos espacio para preocupaciones ambientales. **Además, es importante recordar que sólo algunos países de América Latina tienen grandes concentraciones de capas medias urbanas.**

Grupos motivados por intereses materiales directos

Por lo menos cuatro grupos tienen intereses materiales directos e inmedia-

tos relacionados a la gestión ambiental: los productores que participan en los llamados “mercados verdes”, los productores y comunidades afectados por problemas críticos de contaminación, los movimientos indígenas y los ambientalistas profesionales.

Ha crecido mucho el número de empresas y grupos campesinos interesados en aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen los mercados para alimentos orgánicos, ecoturismo, envases reciclados y productos forestales de bosques manejados de forma “sostenible” (Schmidheiny, 1992). Estos productores tienen un interés directo en el crecimiento de la consciencia ambiental, ya que contribuye a aumentar sus mercados.

De igual forma, hay productores o pobladores que sufren de forma aguda problemas de contaminación o destrucción de los recursos naturales que les causan grandes pérdidas económicas. Esto incluye pescadores artesanales afectados por la contaminación del agua, extractivistas amenazados por la destrucción del bosque, comunidades con depósitos de desechos tóxicos y otros desperdicios y agricultores perjudicados por contaminación proveniente de la industria minera o sector petrolero, entre otros.

Para los movimientos indígenas, el hecho de haber convivido siempre de forma más o menos armoniosa con su entorno natural les ha dado una gran legitimidad entre la opinión pública urbana y se ha convertido en un poderoso argumento a favor de sus demandas territoriales (Toledo, 1992). Para ellos el éxito de esas reivindicaciones territoria-

les es crucial para su supervivencia como grupos étnicos.

Finalmente, hay un grupo importante de personas que trabajan en actividades ambientales, y que tienen un interés evidente en mantener el apoyo para dichas actividades. Esto incluye funcionarios públicos en entidades y proyectos dedicados a asuntos ambientales, académicos y otros científicos, periodistas especializados en estos temas y empleados de ONG's que trabajan ese campo. Este grupo no es grande, pero ejerce una influencia significativa, debido a que la mayor parte de los integrantes son formadores de opinión pública. Además, la participación de científicos le da respetabilidad a los planteamientos en cuanto a la destrucción ambiental.

Mirando los cuatro grupos de forma conjunta, sobresale el hecho de que ninguno tiene un peso grande dentro de las sociedades latinoamericanas, pero todos están creciendo de forma rápida. Excepto para los académicos y ambientalistas profesionales, su presencia tiende a ser localizada, sin lograr cobertura nacional. Probablemente no tienen suficiente fuerza para impulsar reformas profundas, pero han ayudado a mantener el tema ambiental dentro del debate público y han logrado avances concretos en áreas puntuales.

Los movimientos de justicia social

Para la gran mayoría de la población de América Latina su preocupación central es alcanzar un nivel de vida digno para ellos y sus hijos. Históricamente,

esa preocupación tuvo su reflejo político en el desarrollo de partidos políticos de izquierda (comunista, populista y social demócrata) y de sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos de pobladores.

Con el fortalecimiento de las corrientes neoliberales en América Latina, el desgaste político de los partidos tradicionales y la desaparición del bloque socialista ligado a la ex-Unión Soviética, la izquierda latinoamericana ha sido debilitada. Aún así, todavía existen partidos, organizaciones y movimientos de cierta importancia que tienen como preocupación central la lucha por la justicia social. También han crecido las organizaciones campesinas que agrupan pequeños y medianos productores, los movimientos cívicos localizados y las ONG's de origen izquierdista.

Dado el carácter masivo de la pobreza en América Latina, la posibilidad de vincular la problemática ambiental con la lucha por la justicia social es prácticamente la única forma de convertir el tema ambiental en un tema de relevancia para la mayoría de la población. En ese sentido, la incorporación del tema dentro de la agenda de los movimientos de justicia social es fundamental para poder impulsar reformas sustantivas en los modelos de desarrollo. Si esto no se da, algunas reformas ambientalistas todavía se podrían dar, pero serían reformas de cúpulas, sin una participación amplia y democrática de la población.

En los últimos años, ciertos sectores de la izquierda latinoamericana han comenzado a prestar más atención al ambiente. Se dan cuenta que la preocupación por el ambiente ofrece la posibilidad de convertirse en una bandera universal, como fue en el pasado la bandera de la paz, que permite apelar a la opinión pública en su conjunto, y no sólo a los sectores directamente vinculados a las luchas sociales. Intuyen, con cierta razón, que la cuestión del ambiente es uno de los puntos más débiles de las corrientes neoliberales, junto con el de los temas sociales, y por lo tanto ofrece un terreno fértil para atacarlas. En el caso de las organizaciones campesinas, existe la posibilidad de construir alianzas nuevas con otros grupos, argumentando que la pequeña producción puede tener un papel destacado en mantener sistemas de producción diversificados y conservar los recursos naturales.

Al mismo tiempo, todavía hay razones para dudar de la profundidad del compromiso ambiental de la izquierda latinoamericana. Para algunas personas el ambiente no es más que una moda superficial, importada de los países del norte. Observan, con razón, que muchos conservacionistas están más preocupados por los animales y las plantas que por las personas. Ciertos sindicatos tienen miedo de que las restricciones ambientales pueden reducir las oportunidades de empleo. Además, es relativamente fácil ser ambientalista desde la oposición. No resulta tan evidente que los

movimientos de izquierda han dado alta prioridad a los temas ambientales una vez que tienen responsabilidades gubernamentales ⁷.

La posibilidad de que los movimientos sociales ejerzan una fuerte presión por reformas ambientales, también está vinculada a las perspectivas mismas de estos movimientos como fuerzas sociales. Por el momento, estas perspectivas parecen poco alentadoras, aunque no se debería subestimar la importancia de la simple realidad que la pobreza en la región sigue en aumento, y las corrientes neoliberales tienen poco que decir al respecto.

EL MODELO DE ACUMULACION COMO OBSTACULO AL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

La sobre explotación de los recursos como fuente de competitividad

En los últimos veinte años, América Latina ha ido perdiendo competitividad en los mercados internacionales. Entre 1950 y 1970 su participación en las exportaciones mundiales de bienes bajó de 11% al 6%, y para 1990 ya había bajado al 4% (Krueger, 1993). Incluso para mantener ese bajo nivel de presencia en los mercados mundiales la región depende desproporcionalmente de las exportaciones de recursos no renovables, industrias contaminantes y productos

agrícolas que salen de sistemas de producción que no son sostenibles.

Aproximadamente un tercio de las exportaciones de América Latina son de petróleo y otros productos mineros no renovables (Gobierno de los Países Bajos, 1992). Otro tercio viene de las exportaciones agropecuarias, un alto porcentaje de las cuales está compuesto de rubros como frutas, flores, hortalizas, y algodón, producidos con un muy alto consumo de plaguicidas, o de rubros como carne y madera, que salen de zonas recién deforestadas. Dentro de la producción industrial mundial, América Latina tiene una sobre representación de industrias contaminantes como refinerías de petróleo, industria química, fundiciones de acero y hierro, y fabricas de cemento, vidrio y papel (Durán de la Fuente, 1991). En cambio, la región tiene una baja participación en los mercados mundiales de servicios, industrias de alta tecnología como la microeléctrica y biotecnología y otros sectores que presionan menos sobre los recursos naturales.

Otro problema relacionado es que los capitalistas de América Latina tienden a depender más de tener impuestos y salarios bajos y especulaciones comerciales y financieras para alcanzar tasas altas de rentabilidad y menos en altos niveles de ahorro, desarrollo tecnológico, educativo y organización empresarial (Fajnzylber, 1988). Usando la vieja terminología de De Janvry, estas economías tienden a ser "desarticuladas", ya

7. Ver buttell (1992) para una buena discusión sobre la relación entre los movimientos social demócratas tradicionales y el movimiento ambientalista para el caso de los países desarrollados.

que para la mayoría de las empresas más dinámicas, que producen para la exportación o para consumidores nacionales de altos ingresos, los salarios representan sólo un costo y no un mercado potencial (1981).

La alta dependencia de la región en actividades que degradan los recursos naturales y en el mantenimiento de impuestos y salarios bajos para poder competir en los mercados mundiales, fortalece el poder de aquellos grupos que se oponen a un manejo racional de los recursos naturales. Además, el hecho de que la mayor parte de los problemas ambientales de América Latina están más asociados a la producción y no tanto, como en los países desarrollados, al consumo, significa que los grupos afectados por las reformas necesarias, que a menudo son un pequeño número de empresas poderosas, tienden a ser menos dispersos y con mayor capacidad de organización, que los consumidores de los países del norte.

El poder de la banca multilateral

Como se mencionó anteriormente, si bien las instituciones financieras internacionales han sido fuente de presión a favor de ciertas medidas ambientales, también han estado entre los principales propulsores de políticas de ajuste estructural, liberalización y privatización que posiblemente sean incompatibles con ciertos aspectos de un manejo racional de los recursos naturales. Las propuestas de las instituciones financieras, en lugar de impulsar la transformación de

la composición de la producción hacia sectores que degradan menos al ambiente, tienden a reproducir, e incluso fortalecer el énfasis en desarrollar rubros de exportación que responden a una lógica de "minar" los recursos naturales o de aprovechar de la "ventaja comparativa" de tener pocos controles ambientales, mano de obra barata y bajos impuestos.

En este sentido el tema tributario es claro. Una buena gestión ambiental requiere recursos financieros significativos, que deberían ser captados en parte a través de un sistema impositivo gradual. Las instituciones financieras internacionales han apoyado sistemas regresivos de tributación, como los impuestos de valor agregado, y han priorizado el recorte del déficit público sobre casi todos los otros objetivos de la política pública.

La forma de interacción de los organismos financieros internacionales con los países es fundamentalmente anti-democrática. Cada vez más las políticas se definen no por un proceso participativo y democrático a nivel nacional, sino a través de las condiciones que imponen los bancos para poder aprobar y desembolsar préstamos. Estas negociaciones de cúpulas dejan al margen a la gran mayoría de la población y la convierte en espectadora pasiva de la toma de decisiones. Eso limita la legitimidad de las políticas frente a la opinión pública y por tanto la posibilidad de involucrar a la población en los esfuerzos ambientalistas.

Frente a la escasez extrema de liquidez internacional que significó la "crisis

de la deuda” en los años ochenta, los gobiernos de América Latina no tuvieron muchas otras opciones que aceptar las recomendaciones de esas instituciones (Wood, 1986). En los últimos cinco años han mejorado mucho las reservas de divisas de América Latina, en parte debido al crecimiento de las exportaciones y en parte a la entrada de capitales privados. Sin embargo, el visto bueno de los bancos multilaterales para los programas económicos sigue siendo una precondición casi absoluta para conseguir acceso a los mercados financieros internacionales.

EL PAPEL DEL ESTADO

La autonomía relativa del Estado

Además de la existencia de presiones en favor y en contra de reformas ambientalistas, la posibilidad de que los gobernantes diseñen e implementen ese tipo de reforma depende en parte de ciertas características del Estado mismo. Una de las más importantes es la permeabilidad y sensibilidad del Estado frente a las distintas presiones. Entre los factores de mayor peso que influyen en dicha permeabilidad se encuentran: los objetivos del grupo gobernante, el poder relativo del aparato estatal frente a los otros sectores de la sociedad, las fuentes de procedencia de los gobernantes y los mecanismos específicos a través de los cuales los distintos sectores sociales influyen al Estado.

Por lo general, Estados con gran autonomía de los grupos empresariales,

surgen cuando esos grupos son débiles o fragmentados (Hamilton, 1983). En esos contextos pueden aparecer Estados “desarrollistas”, motivados a promover el desarrollo social, o Estados “mercantilistas”, preocupados sobre todo con repartir los beneficios que permite el poder estatal entre los funcionarios mismos (Bates, 1988; Bayart, 1989). En el primer grupo se incluyen los gobiernos revolucionarios o reformistas como los de Cuba o Nicaragua (1979-1990), Panamá (1968-1981), Honduras (1973-1990). Llamarlos desarrollistas no significa que lograron desarrollar los países, sino simplemente que tuvieron una lógica más allá de sólo la captación de rentas para los gobernantes mismos. El segundo grupo, se asocia con gobiernos poco ideológicos en países con sectores empresariales débiles, como Haití, Perú o Nicaragua después de 1990. Ya prácticamente no quedan gobiernos del primer tipo en América Latina. Los gobiernos de segundo tipo son incompatibles con una gestión ambiental adecuada por su baja capacidad de liderazgo y el débil desarrollo de sus aparatos institucionales.

En otros contextos, donde la sociedad civil y los sectores empresariales son más consolidados, varía mucho el grado de autonomía relativa del Estado. Donde existe mayor autonomía, si bien *“el Estado es obligado por su posición dentro de una formación social dada a preservar o reproducir esa formación social; la intervención directa de la clase dominante no es necesaria y de hecho puede ser perjudicial para este proce-*

so. *La autonomía del Estado con respecto a la intervención directa de la clase dominante le permite operar más eficazmente*" (Hamilton, 1983). Al no tener que responder de forma directa a todos los intereses particulares que pueden estar opuestos a reformas ambientales, una mayor autonomía del Estado respecto de las clases dominantes, ofrece mayores posibilidades para ese tipo de reforma.

Como hipótesis, se puede pensar que los Estados latinoamericanos tienden a ser más autónomos en países: a) grandes, donde ningún grupo específico de empresarios pesa lo suficiente para influir demasiado sobre la política nacional, b) donde los altos políticos del gobierno se forman en carreras dentro del sector público y no en el sector privado, c) donde los gobiernos disponen de muchos recursos propios a través de monopolios sobre el petróleo u otros recursos naturales, d) que han pasado por grandes luchas sociales, donde los grupos empresariales han tenido que ceder espacios de participación a otros sectores y e) con mecanismos democráticos más institucionalizados y participativos.

El grado de autonomía del Estado también varía según el tema tratado. Los gobiernos pueden ser muy autónomos en relación a ciertos temas, y no con respecto a otros. Por lo general, mientras menos presión sobre algún tema, más autonomía tienen. En cuanto se refiere a los problemas ambientales, los Estados tienen mucho espacio para dar discursos ambientalistas, que no perju-

dican a nadie y para tomar decisiones de carácter más simbólico, pero les es mucho más difícil tomar medidas que afecten directamente a los intereses más poderosos.

Los procesos de ajuste estructural y privatización han tenido un impacto contradictorio en cuanto a la autonomía relativa del Estado. Por un lado, han debilitado los gobiernos y han facilitado la participación de los grupos empresariales en la esfera pública. Por el otro lado, la dependencia creciente de los gobiernos en la banca multilateral, les ha hecho más independiente frente a las presiones de grupos empresariales específicos. Esto abre la posibilidad de reformas ambientalistas que perjudican ciertos sectores del capital, siempre y cuando reciban el apoyo de la banca multilateral (David Mayrhe, comunicación personal).

Las reformas ambientalistas son favorecidas por condiciones que vuelven al Estado más permeable a presiones a su favor. Por lo general, la presencia de mecanismos institucionales que abren espacios de participación democrática cumplen con esta condición. Tienen especial importancia los procesos de descentralización de la toma de decisiones, ya que, como se demostró anteriormente, muchos de los grupos de presión que favorecen un manejo racional de los recursos naturales son de carácter local. Es mucho más probable que pueden influir en la toma de decisiones si se hacen a nivel local, y no a nivel nacional o internacional.

La capacidad de implementación de políticas

Finalmente, la capacidad del Estado para implementar reformas ambientales depende de la presencia de una maquinaria institucional efectiva y eficiente y diseñada en función de los objetivos ambientales. Como dicen Rueshemeyer y Evans (1985:51), *“para entender cuánto el débil desarrollo de la burocracia limita la capacidad del Estado para intervenir, es necesario reconocer que la construcción de una maquinaria burocrática es un proceso de largo plazo. Además de los recursos necesarios para hacerla funcionar, hay un aspecto menos tangible, pero igualmente crítico, de la construcción de un aparato estatal burocrático... Un proceso efectivo de fortalecimiento institucional tiene que formar las metas, prioridades y compromisos de los funcionarios claves y promover visiones compartidas sobre las cuales se puede basar una racionalidad común”* (traducción del autor). Esto implica un proceso de fortalecimiento institucional que solo marginalmente está relacionado con el constante cambio de mandatos, organigramas y acceso a recursos financieros que han caracterizado los gobiernos latinoamericanos en los últimos años.

Dentro de América Latina, en general México y los países del Cono Sur han logrado desarrollar maquinarias burocráticas mucho más consolidadas que los países de América Central o la zona andina (con las excepciones de Colombia y Costa Rica). Eso les da una venta-

ja nada despreciable en cuanto a la capacidad de implementar reformas ambientalistas.

Aún así, en todos los países de América Latina, excepto quizás Chile, los procesos de ajuste estructural, y las corrientes neoliberales que han estado asociado a ellos, han tenido como una de sus consecuencias principales el debilitamiento de la maquinaria estatal y la desmotivación de sus integrantes. Si bien no se ha planteado la eliminación del aparato estatal, sino solamente su reforma, el resultado final ha sido una reducción generalizada de la capacidad de intervención estatal, y la pérdida del “*esprit corps*” de los funcionarios; lógicamente ese proceso ha sido más profundo en aquellos países donde siempre fue débil el aparato burocrático.

Para todos los gobiernos la implementación de políticas ambientales trae consigo una serie de problemas particulares. Para comenzar, el “ambiente” no es un sector, sino que está presente en todos los sectores. La creación de entidades ambientales especializadas tiene el riesgo de aislar el tema, y apartarlo de las discusiones centrales en cuanto a política macroeconómica, industrial, agropecuaria y urbana. Por otro lado, si no se define un espacio específico con poder que se preocupe por cuidar los intereses ambientales, es probable que los otros intereses se sobrepongan en la mayoría de los casos.

La gestión ambiental requiere normas y controles que aseguran que los individuos respetan los intereses globales de la sociedad. Muchos de los temas

son complejos, y demandan una fuerte capacidad científica para ser abordados. Pero también se requiere un alto grado de participación y motivación de la población; resulta difícil combinar los tres estilos de gestión (coercitivos, tecnocráticos y participativos). De igual forma, muchos problemas ambientales requieren un abordaje sistémico que implica la necesidad de trabajos multi-disciplinarios e inter-institucionales, algo difícil de lograr dentro de los esquemas actuales de administración pública. La descentralización es clave, no sólo para facilitar la participación local en la toma de decisiones, sino también para un manejo más eficiente de la información, ya que la situación de los recursos naturales varía mucho entre uno u otro lugar. Sin embargo, la experiencia en América Latina con mecanismos descentralizados, todavía es limitada.

CONCLUSION

La factibilidad de generar una disposición política a favor de un manejo racional de los recursos naturales en

América Latina todavía es incierta. Han aumentado mucho las presiones en ese sentido, pero aún así siguen siendo corrientes débiles frente a la realidad de que el modelo actual de acumulación de la región, está basado en gran medida en un uso insostenible de los recursos naturales. Dos actores claves para el futuro serán los gobiernos de los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales, por un lado, y los movimientos a favor de la justicia social, por otro. Aún no se conoce la fuerza que estos dos grupos tendrán en el futuro, ni su grado real de compromiso con un manejo más racional de los recursos naturales.

Dentro de ese contexto global, hay países donde los Estados han demostrado mayor autonomía y capacidad de acción que otros. Si esos factores se pueden combinar con una correlación de fuerzas sociales favorables a las reformas ambientalistas, probablemente esas se puedan efectuar.

La apertura de espacios democráticos de discusión y participación favorece esa posibilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bates, Robert (ed.) *Towards a Political Economy of Development, a Rational Choice Perspective* (Berkeley: University of California Press, 1988).

Bayart, Jean Francois, *L'Estat en Afrique, La politique du ventre* (Paris: Librairie Fayard) 1989.

Bramble, Barbara; Porter, Gareth, "Non-Governmental Organizations and the Making of US International Environmental Policy", pp. 313-353, en **The International Politics of the Environment**, Andrew Hurrell; Benedict Kingsbury eds. (Oxford: Clarendon Press) 1992.

Buttel, Frederick, "Environmentalism: Origins, Processes, and Implications for Rural Social Change", **Rural Sociology**, Vol. 57, N° 1, 1992: 1-27.

De Janvry, Alain, **The Agrarian Question and Reformism in Latin America** (Baltimore: John Hopkins University Press, 1981).

De Janvry, Alain; Sadoulet, Elisabeth; Thorbecke, Erik, "Introduction", **World Development**, Vol 21, N° 4, 1993: 565-575.

Duran de la Fuente, Hernán, "Contaminación industrial y urbana: opciones de política", **Revista de la CEPAL**, N° 44 (Agosto), 1991: 137-148.

Fajnzylber, Fernando, "Competitividad Internacional: evolución y lecciones", **Revista de la CEPAL**, N° 36 (Diciembre), 1988: 7-24.

Gobierno de los Países Bajos, **Un mundo de diferencias, un nuevo marco de trabajo para la cooperación al desarrollo en los años noventa** (San José, Costa Rica: InterPress Service) 1992.

Hamilton, Nora, **México: los límites de la autonomía del Estado** (México D.F.: Ediciones ERA) 1983.

Hurrell, Andrew, "Brazil and the International Politics of Amazonian Deforestation", pp. 398-429, en **The International Politics of the Environment**, Andrew Hurrell; Benedict Kingsbury eds. (Oxford: Clarendon Press) 1992.

Krueger, Anne, **Economic Policies at Cross - Purposes, The United States and Developing Countries** (Washington D.C.: Brookings Institute) 1993.

Leis, Héctor, "El rol educativo del ambientalismo en la política mundial", **Nueva Sociedad**, N° 122 (noviembre-diciembre) 1992: 116-127.

Reed, David (ed.), **Structural Adjustment and the Environment** (Boulder, Colorado: Westview Press), 1992.

Rueschmeyer, Dietrich; Evans, Peter, "The State and Economic Transformations: Toward an Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention", pp. 44-77, en **Bringing the State Back In**, Peter Evans; Dietrich Rueschmeyer; Theda Schocpol eds. (Nueva York: Cambridge University Press) 1985.

Sale, Kirkpatrick, **The Green Revolution, The American Environmental Movement 1962-1992** (Nueva York: Hill and Wang) 1993.

Schmidheiny, Stephan, **Cambiando el rumbo, una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el medio ambiente** (México D.F: Fondo de Cultura Económica), 1992.

Toledo, Victor, "Utopía y Naturaleza, El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina", **Nueva Sociedad**, N° 122 (noviembre-diciembre) 1992: 72-85.

Viola, Eduardo, "El ambientalismo brasileño, de la denuncia y concientización a la institucionalización y el desarrollo sustentable", **Nueva Sociedad**, N° 122 (noviembre-diciembre) 1992: 138-155.

Wood, Robert, **From Marshall Plan to Debt Crisis: Foreign Aid and Development Choices in the World Economy** (Berkeley: University of California Press), 1986.

SINTESES

La Cooperación Internacional y
**EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EN AMERICA LATINA**

Número 20
Julio-Diciembre 1993

PRESENTACION / EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA: Contexto y prioridades de la cooperación internacional para el Desarrollo Sustentable, **Roberto Guimaraes**. Nuevos paradigmas tecnológicos y desarrollo sostenible: perspectiva latinoamericana, **Aldo Ferrer**. Conservación, desarrollo sustentable y juego político en la política de bosques nativos en Chile, **Eduardo Silva**. **LA COOPERACION INTERNACIONAL MEDIO AMBIENTAL:** La cooperación europeo-latinoamericana en materia de medio ambiente, **Anneke Jessen**. El acuerdo holandés de desarrollo sostenible con Costa Rica, **Paul Van Horn**. El papel de los organismos multilaterales de cooperación en el desarrollo sostenible: el caso del BID, **Enrique Iglesias**. El desarrollo sostenible en Latinoamérica y las organizaciones no gubernamentales, **Alicia Barcena**. El debate comercio internacional vs. ecología, **Heraldo Muñoz**. **MISCELANEA:** Reseñas. Listado de Centros Ambientalistas. **Dirección:** Claudio Coello 101 - Bajo izda. / Madrid 28006 - España. Teléfono: (34-1) 577-0640. Fax: (34-1) 576-3070.

ediciones

caap

DIALOGOS / Ecuador: estrategias para una política de Comercio Exterior / Autor: Jürgen Schuldt / Comentarios de: Mauricio Pinto, Pablo Lucio Paredes, Oswaldo Dávila y Zonia Palán

DIALOGOS

Ecuador: estrategias para una política de Comercio Exterior
Jürgen Schuldt

Comentarios de Mauricio Pinto,
Pablo Lucio Paredes, Oswaldo Dávila y
Zonia Palán



 caap

Cómo implementar una política coherente y de largo plazo para el comercio exterior, más allá de intereses específicos y de acciones puntuales de beneficio para ciertos grupos o para determinadas y muy cortas coyunturas, parece ser el reto que debemos asumir como país, y poner en práctica ese cada vez más demagógico discurso: "... en favor de los altos intereses nacionales..." Conciliar entre lo coyuntural y lo estructural, en la búsqueda de definir un modelo de desarrollo, nuestro, adecuado a nuestras posibilidades, que nos permitan incluir a todos los sectores económicos, productivos y sociales, es nuestra permanente necesidad.

Análisis



MEDIO AMBIENTE Y URBANIZACION

Pobreza en Areas Urbanas Cuestiones Ambientales - Hábitat Popular

La provisión de agua en el Gran Buenos Aires. Marcos Novaro y Pablo Perelman / **La pobreza en el área de Lima Metropolitana.** Julio Gamero, Rosa Guzmán y Lourdes Velverde / **Pobreza urbana, marginalidad, exclusión e integración social. Algunos criterios para el tratamiento del problema.** Denis Merklen / **Inquilinatos y hoteles en Buenos Aires. La trayectoria centenaria del mercado de alquiler de piezas.** Marta Bellardi / **"Una Boca con o sin negritos" Diferentes actores en disputa por la apropiación del espacio barrial.** Mónica Lacarrieu / **Ecología, ética, epistemología y economía. Relaciones difíciles pero necesarias.** Antonio Elizalde / **El ordenamiento geocológico en la planificación regional en Cuba.** Eduardo Salinas Chávez.

Suscripción anual (4 números): Argentina \$ 35, Limitófes y Perú u\$s 35,

Resto de América Latina u\$s 38, Resto del Mundo u\$s 50.

Pagos a nombre de Ana N. de Hardoy, en Argentina: cheques sobre plaza Bs.As. o giro postal.

En el exterior: cheques sobre plaza EE.UU. Corrientes 2835, 6to. piso B, Cpo. A, 1193,
Buenos Aires, Argentina.

IIED - AL

socialismo y participación

68

NOTA EDITORIAL.- CONSEJO EDITOR: Tendencias del proceso económico y político actual. **FRANCISCO GUERRA GARCIA:** Paco Campodónico, Medio siglo con los libros. **ARTICULOS.- HECTOR BEJAR:** Vigencia y cambio: Interpretando a José Carlos Mariátegui. **P. ALAIN BIROU O.P.:** Las fuerzas hegemónicas de nuestra civilización. **JOSE RIVERO H.:** Infancia, educación y desarrollo en América Latina. **MIGUEL A. CASTIGLIA, DANIEL MARTINEZ Y JAIME MEZZERA:** Sector informal urbano: una aproximación a su aporte al producto. **MARIANO VALDERRAMA:** AID y Cooperación USA en revisión "De la Alianza para el Progreso al NAFTA". **ARTE.- FERNANDO BRAVO ALARCON:** L'opera è movile: desafíos de la lírica. **VICTOR ESCALANTE:** Víctor Escalante por Víctor Escalante. Carteles, bocetos y dibujos. **DEBATE.- VICENTE SANTUC SJ:** Mediación y política. **DOCUMENTOS.- ALEJANDRO TEITELBAUM:** Relaciones entre los organismos de Bretton Woods y el sistema de las Naciones Unidas. **CRONICA.- NOVEDAD BIBLIOGRAFICA.- PUBLICACIONES RECIBIDAS**

Suscripción: Anual (4 números) vía aérea: Perú: S/45,00. Extranjera; US\$60,00.

Ediciones SOCIALISMO Y PARTICIPACION Recavarren 520 Miraflores, Lima 18 - Perú.